



La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; su homólogo belga, Mathieu Bihet (izda.), y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. OLIVIER HOSLET / EFE

Criba masiva en la red eléctrica

● Más de la mitad de los proyectos industriales que han obtenido los permisos de conexión desde 2022 podrían morir en noviembre ● Sus promotores no han cumplido la medida antiespeculación del Gobierno

PAULA MARÍA MADRID
Las medidas que ha ido adoptando el Gobierno para atajar la especulación en la red eléctrica revelarán en cuestión de meses el verdadero acaparamiento de permisos de conexión que sufre España. De hecho, el próximo noviembre va a producirse la mayor criba de nuevos proyectos de inversión, desde industrias hasta centros de datos, de la historia de nuestro país.

El pasado 7 de noviembre, el Ministerio de Transición Ecológica introdujo en el real decreto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico una obligación adicional que ha pasado desapercibida y que, sin ninguna duda, va a cambiar el mapa de la reindustrialización española. A partir de ese día, los promotores debían justificar un pago equivalente al 10% del coste total de las actuaciones necesarias en la red para enchufar sus proyectos en los siguientes doce meses.

A día de hoy, el 55% de los proyectos que han logrado el permiso de acceso desde el 2022 no han aportado este pago, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes próximas al Gobierno. Es decir, más de la mitad de la capacidad otorgada en los últimos cuatro años para nuevas demandas en la red de transporte –alta tensión, donde se conectan los grandes consumidores– se encuentra actualmente en un riesgo legal inminente.

Red Eléctrica, el gestor de la red de transporte que se encarga de conceder los permisos de acceso, reveló por primera vez en febrero la disponibilidad para nueva demanda eléctrica en su red. Reportó que solo en la red de transporte actualmente hay otorgados permisos de acceso y conexión a 129 gigavatios GW para eólicas y fotovoltaicas, otros 16 GW para almacenamiento y 19 GW más para nueva demanda. «De estas últimas, desde 2022, fecha en que se aprobó la planificación vigente, se han otorgado 11,8 GW de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto aún en servicio», informó.

7
De noviembre. Ese día, aquellos promotores que no hayan aportado el pago exigido por el Gobierno perderán el derecho de acceso clave para sus proyectos.

De esos 11,8 GW, alrededor de 5,3 GW han abonado ya el 10% de los costes de las actuaciones de red que exige la ley. Sus proyectos son para desarrollar, principalmente, centros de datos y en menor medida hidrógeno verde e industria.

Por contra, los proyectos que no han acreditado aún esta obligación suman 6,5 GW, una capacidad que podría ser liberada de la red automáticamente en noviembre. La cifra es significativa. Para que el lector se haga una idea, equivaldría a la demanda de más de un centenar de los centros de datos que habitualmente se instalan en España.

La caducidad del permiso de conexión supone *de facto* la muerte de los proyectos. Perderlo conlleva también importantes penalizaciones económicas para sus promotores. En el caso de la demanda, el Gobierno exige también a los promotores garantías financieras por valor de 40.000 euros por MW. Los proyectos en riesgo de perder el permiso de acceso en noviembre han presentado avales por alrededor de 300 millones de euros, que dada la situación corren un altísimo riesgo de ejecutarse.

CERCO A LA ESPECULACIÓN
Acabar con el acaparamiento de permisos de acceso se ha convertido en una prioridad para el ministerio que lidera Sara Aagesen, cuando el aluvión de peticiones para nuevos consumidores ha convertido los tendidos eléctricos en un activo escaso que está desatando una feroz competencia entre sectores tan diversos como el de la IA, el farmacéutico, el energético o la automoción.

SIN AVE EN MÁLAGA
NUEVAS FECHAS. Adif volvió ayer a retrasar la reapertura de la línea cortada del AVE a Málaga (prevista para el 23 de marzo) hasta la última semana de abril, lo que implica que no estará en funcionamiento en Semana Santa, muy señalada para la ciudad que ya estima pérdidas de más de 300 millones de euros.

SIN CONEXIÓN DESDE ENERO. La conexión del AVE a Málaga está interrumpida desde el accidente de Adamuz (Córdoba), al que siguió la caída de un talud a la altura de la localidad de Álora. Desde entonces se viaja por carreteras.

DIMISIÓN. Elías Bendodo (PP) expresó ayer, a través de redes sociales, que «se ha castigado al sur de nuestro país, no solo a Málaga, sino a toda Andalucía. Exigimos la dimisión de Óscar Puente. El Gobierno tardó tres semanas en reaccionar cuando cayó el talud de Álora, y las obras van a un ritmo lentísimo».

Si los permisos de conexión los acaparan proyectos poco sólidos, el coste de las redes para el conjunto de los consumidores (hogares y empresas) crece. Además, la especulación diluye los beneficios para el conjunto de la economía de la atracción industrial que se ha generado alrededor de España por el menor coste de la electricidad gracias a las renovables.

Además de los avales financieros y la obligación de pagar con anticipación parte de los costes de red, Transición Ecológica ha forzado a los promotores a identificar el tipo de actividad (CNAE) del proyecto para el que piden el permiso de acceso en el mismo momento en que lo solicitan, que deberá ser la misma cuando, posteriormente, se firme el correspondiente contrato de acceso y conexión.

En este mismo sentido, el Gobierno ha fijado un plazo máximo de cinco años para terminar los proyectos a contar desde el día en que logran el permiso de acceso. Una vez pasado este margen, el promotor perdería automáticamente este derecho.

La saturación de la infraestructura eléctrica es el cuello de botella que mantiene en vilo cientos de proyectos en toda Europa. En España, la red de distribución (media tensión) está copada casi al 100%. En alta tensión, el 25% de los nudos aún podían absorber nueva demanda al cierre de febrero, según Red Eléctrica.